



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE PASTO

PROCESO: ACCIÓN DE TUTELA
RADICACIÓN: 52-001-33-33-005-2024-00249-00
ACCIONANTE: ANDRÉS ORLANDO VILLOTA BENAVIDES
ACCIONADO: ESCUELA JUDICIAL “RODRIGO LARA BONILLA”

ADMITE ACCIÓN DE TUTELA

San Juan de Pasto, quince (15) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024).

Reunidos los requisitos y formalidades exigidas en el Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, se **ADMITE** la demanda de tutela.

De la medida provisional.

La parte accionante ha hecho solicitud de medida provisional de protección de derechos fundamentales, en sentido de ordenar a la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” disponer su inclusión provisional en la sub fase especializada del IX Curso de Formación Judicial adelantado en virtud de la Convocatoria 27, que tiene como fecha inicial el 16 de noviembre de 2024, conforme el cronograma de la convocatoria que se encuentra alojado en la plataforma de la Rama Judicial.

Para resolver sobre la solicitud de medida provisional, este despacho procede a hacer las siguientes consideraciones:

Si bien el artículo 7° del Decreto 2591 de 1991, faculta al juez constitucional para dictar cualquier medida de conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados, su procedencia está supeditada al cumplimiento de tres exigencias: (i) que exista una vocación aparente de viabilidad, (ii) que exista un riesgo probable de afectación al derecho fundamental por la demora en el tiempo transcurrido dentro del trámite de tutela y (iii) que la medida no resulte desproporcionada¹. A su vez, del caso deben desprenderse razones suficientes que sustenten la necesidad de la medida; para ello, tanto los hechos como las evidencias aportadas o los indicios que se desprendan del expediente deben enrostrar la gravedad de la situación. Pues no puede perderse de vista que el decreto de medidas provisionales es excepcional y su determinación debe ser razonada, sopesada y proporcionada a la situación planteada.

Frente a los requisitos establecidos por la jurisprudencia, debe decirse que la vocación aparente de viabilidad tiene que ver con la apariencia de buen derecho, esto es, que exista un respaldo fáctico posible y jurídico razonable que permita inferir, al menos *prima facie*, la afectación del derecho fundamental. En segundo lugar, la existencia de un riesgo probable de afectación a derechos fundamentales que, por la demora en el tiempo transcurrido durante el trámite de tutela, tiene como finalidad evitar que se

¹ Corte Constitucional. Auto 259 del 26 de mayo de 2021. M.P. Diana Fajardo Rivera.

genere un perjuicio irremediable a los derechos a amparar o que, de no evitarlo, el fallo resulte inane. Para ello, debe existir un alto grado de convencimiento de la ocurrencia de un perjuicio irremediable y que la medida resulta ser, en extremo, necesaria para evitarlo².

En síntesis, la medida resulta necesaria porque ni siquiera el fallo de instancia podría corregir la vulneración *ius fundamental*. Finalmente, la medida no debe resultar desproporcionada. Para ello, el juez constitucional debe hacer una ponderación entre los derechos sobre los cuales se deprecia el amparo de tutela (derechos protegidos con la medida) y los derechos de los accionados o terceros que podrían verse afectados.

Una vez contextualizados los requisitos de procedencia de la medida provisional, este despacho procederá a concederla, en atención a las siguientes consideraciones:

El accionante se inscribió al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial (Convocatoria 27), adelantado en virtud del Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2024.

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2024, por medio del cual se convocó al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial, se estipuló una etapa de selección integrada por una prueba de aptitudes y conocimientos (Fase I), la verificación de requisitos mínimos (Fase II) y el Curso de Formación Judicial Inicial (Fase III), todas ellas con carácter eliminatorio.

Seguidamente, se estipuló una etapa clasificatoria comprendida por los siguientes factores:

1) Pruebas de aptitudes y conocimientos. Hasta 500 puntos.

A los concursantes que obtengan 800 puntos o más en las pruebas de aptitudes y de conocimientos, se les aplicará una nueva escala de calificación entre 300 y 500 puntos así: el menor puntaje de los aspirantes que superen las pruebas de aptitudes y conocimientos (800) será ahora de 300/500 y el mayor (1.000) será de 500/500. Los demás puntajes se asignarán proporcionalmente.

² «El segundo requisito (*periculum in mora*) tiene que ver con el riesgo de que, al no adoptarse la medida cautelar, sobrevenga un perjuicio o daño mayor del que se expone en la demanda, que de no precaverse, transforme en tardío el fallo definitivo. Tiene igualmente que ver con un temor fundado de que el derecho se frustre o sufra menoscabo durante la sustanciación del proceso. Este análisis recoge así los criterios (ii) y (iii) del juicio inicialmente formulado por la jurisprudencia constitucional. Implica tener un alto grado de convencimiento de que la amenaza de perjuicio es cierta, y que el daño, por su gravedad e inminencia, requieran medidas urgentes e impostergables para evitarlo.

Los dos pasos descritos deben operar conjuntamente. Precisamente, el segundo requisito (*periculum in mora*) impide que el juez de tutela profiera una orden ante la simple apariencia de verdad (*fumus bonis iuris*) de la solicitud de amparo. La medida provisional no es el escenario procesal para resolver el asunto de fondo, así se cuente con todos los elementos para tomar una decisión. El Artículo 7 del Decreto 2591 de 1991 solo se activa cuando, además de la apariencia de verdad, se requiera la intervención urgente del juez. A su vez, esto supone la amenaza de un perjuicio irremediable a un derecho fundamental o al interés público, que no podría ser corregido en la sentencia final.» (Corte Constitucional. Auto 259 de 2021)

II) Prueba psicotécnica. Hasta 200 puntos.

La prueba psicotécnica se aplicará en la misma sesión que las pruebas de aptitudes y conocimientos; tiene un puntaje máximo de 200 puntos y es de carácter clasificatorio. Sólo se publicarán los resultados de la prueba psicotécnica de los concursantes que hayan aprobado las pruebas de aptitudes y conocimientos.

III) Curso de Formación Judicial Inicial. Hasta 200 puntos.

A los concursantes que hayan superado satisfactoriamente la Fase III de la etapa de selección – Curso de Formación Judicial Inicial, esto es, quienes hayan obtenido entre 800 y 1000 puntos, se les aplicará una nueva escala de calificación que oscila entre 100 y 200 puntos. De tal forma que el menor puntaje para los aspirantes que superen el curso de formación (800) será 100/200 y el mayor (1.000) será 200/200. Los demás puntajes se asignarán proporcionalmente.

IV) Experiencia adicional y docencia. Hasta 70 puntos.

La experiencia laboral en cargos con funciones relacionadas con la especialidad a desempeñar, o en el ejercicio profesional independiente en áreas jurídicas o ciencias administrativas, económicas y financieras según el cargo, adicional a la experiencia mínima requerida, dará derecho a diez (10) puntos por cada año o proporcional por fracción de éste. La docencia en la cátedra en áreas jurídicas o en ciencias administrativas, económicas o financieras, cuando el cargo lo requiera, dará derecho a cinco (5) puntos por cada semestre de ejercicio de tiempo completo. En todo caso, la docencia y la experiencia adicional no podrán ser concurrentes en el tiempo y el total del factor no podrá exceder de 70 puntos.

V) Capacitación adicional. Hasta 30 puntos.

Cada título de postgrado relacionado con la especialidad del cargo de aspiración, que se acredite en la forma señalada en el numeral 2.5.8 del presente Acuerdo, se calificará así: especialización 5 puntos; maestría 15 puntos y doctorado 30 puntos. En todo caso, no se calificarán más dos especializaciones y una maestría como capacitación adicional.

En el factor correspondiente a pruebas de aptitudes y conocimientos el accionante alcanzó una calificación de 852,55 puntos, factor que concede, dentro del ponderado general, hasta una calificación de 500 puntos, es decir, equivale al 50% de los factores para tener en cuenta dentro del proceso de selección.

Lo anterior evidencia un alto grado de desempeño por parte del accionante dentro de la etapa clasificatoria, desempeño que no puede perderse de vista al momento de efectuar el análisis de la vocación aparente de viabilidad del derecho que se busca proteger a través del amparo de tutela.

En lo que respecta al factor correspondiente al Curso de Formación Judicial Inicial, que otorga un puntaje ponderado de 200 puntos, el accionante, mediante Resolución No. EJR24-298 del 21 de junio de 2024, obtuvo una

calificación de 791,280 puntos³, siendo reprobado por no alcanzar la calificación mínima fijada en 800 puntos.

De conformidad con lo dispuesto en el acuerdo de la convocatoria, los discentes que hayan reprobado el Curso de Formación Judicial Inicial contarían con 10 días para interponer recurso de reposición contra el acto administrativo contentivo de las calificaciones del referido curso, actuación que fue adelantada por el accionante oportunamente.

Una vez cumplido el término para resolver el recurso, mediante Resolución No. EJ24-1040 del 05 de noviembre de 2024, la Escuela Judicial le reconoció al accionante 8,75 puntos, correspondientes a las siguientes preguntas:

Programa	Pregunta	Puntos
Derechos Humanos y Género	54	1,25
Derechos Humanos y Género	78	6,25
Gestión Judicial y Tics	30	1,25
Total		8,75

Si se tiene en cuenta que la calificación obtenida en primera oportunidad fue de 791,280 y mediante acto administrativo que resolvió el recurso de apelación se concedieron 8,75 puntos en favor del accionante, sin que a lo largo del acto administrativo se informe de una reducción en la calificación inicial o de la invalidez de alguna de las respuestas calificadas como acertada en la Resolución No. EJ24-298 del 21 de junio de 2024, no se entiende como la suma aritmética arroja un valor inferior a 800, pues si la simple suma nos ofrece un resultado de 800,03 puntos.

Lo anterior evidencia una falencia de motivación en la Resolución No. EJ24-1040 del 05 de noviembre de 2024, que resolvió el recurso de reposición, pues sin que exista indicio de que los 791,280 puntos de la calificación inicial hayan sido disminuidos y la razón para ello, el resultado de la sumatoria de la calificación, una vez concedidos los 8,75 puntos del segundo acto administrativo, el único puntaje posible es 800,03.

Los anteriores argumentos permiten evidenciar que existe una vocación aparente de viabilidad en la tutela del derecho, puesto que, existe un respaldo fáctico posible y jurídico razonable que permite inferir, al menos en este prístino examen, que existe una afectación al derecho al debido proceso del accionante.

En cuanto al segundo criterio de procedencia de la medida provisional, es válido afirmar que, de no concederse la medida, el accionante perdería la oportunidad de desarrollar, bajo el cronograma de la convocatoria, la Sub fase Especializada del IX Curso de Formación Judicial Inicial, pues el mismo tiene inicio el 16 de noviembre de 2024 y finaliza el 09 de marzo de 2025, interregno en el cual se desarrollan las unidades 1 y 2 del proceso formativo. Adicionalmente, la evaluación de estas dos primeras unidades tiene lugar el 16 de marzo de 2024.

³ <https://www.ramajudicial.gov.co/documents/7227621/155802983/EJ24-298+-+Anexo.pdf/3089e21e-80e6-7f0b-6e23-167ec5e78c6a?t=1719235602053>

Lo anterior deja ver que, pese a que el fallo de tutela tendría la virtualidad de remediar la vulneración de los derechos del accionante, lo despojaría de un tiempo relevante para adelantar su formación, poniéndolo en una situación de discriminación con respecto al resto de discentes que se encuentran en formación, pues de entrada, contaría con dos semanas menos para efectuar un proceso de formación integral, concienzudo, razonado, situación que puede edificar un perjuicio relevante, dado que muchos de los participantes del proceso de selección se desempeñan laboralmente y cumplen obligaciones concomitantes con su proceso formativo.

Finalmente, en cuanto al criterio de proporcionalidad de la medida, el despacho encuentra que el instrumento mediante el cual se contrató la Fase III del IX Curso de Formación Judicial Inicial de la Convocatoria 27, tuvo en cuenta la participación de 3.459 aspirantes, es decir, si se tiene en cuenta que, hasta la fecha, el número de aprobados es inferior a 2.000, la inclusión del accionante no va a generar sobre costos o afectación a la infra estructura virtual para la formación. En consecuencia, en el ejercicio de ponderación de derechos entre el accionante y la accionada y los terceros eventualmente afectados, no existe evidencia que permita inferir que la medida ocasione un perjuicio irremediable a terceros con interés, de ahí que sea viable su concesión.

En consecuencia, se dispone:

1-. Notifíquese personalmente de la presente acción constitucional a la **Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”**, corriendo traslado del escrito de tutela y sus anexos.

2-. Vincular a la **Unión Temporal IX Curso de Formación Judicial 2019**, para que se pronuncie frente a los hechos expuestos en el libelo de tutela, presente las replicas y pruebas a que haya lugar y, en general, ejerza su derecho de defensa y contradicción.

3-. A las entidades se les solicita rendir informe respecto de los hechos descritos en la demanda de tutela, para lo cual cuenta con un término de **dos (02) días**, contados a partir del día siguiente en que se comunique esta providencia.

4-. Prevenir a las entidades que el informe se considerará rendido bajo la gravedad del juramento. Se advierte que la omisión injustificada en su envío dará lugar a responsabilidad y que, de no rendirse dentro del plazo fijado, se tendrán por ciertos los hechos manifestados por la accionante. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 del Decreto 2591 de 1991.

5-. Conceder la medida provisional de protección de derechos fundamentales deprecada por el señor Andrés Orlando Villota Benavides, en consecuencia, ordenar a la **Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”** que, **de manera inmediata** a la comunicación de esta providencia, incluya y permita el ingreso pleno, del discente, al proceso formativo de la Sub fase Especializada del IX Curso de Formación Judicial Inicial de la Convocatoria 27, hasta tanto se adopte una decisión de fondo dentro del presente trámite constitucional.

6-. Notificar esta providencia a todas y cada uno de los discentes que hacen parte del IX Curso de Formación Judicial Inicial, remitiendo los archivos de tutela y auto de admisión a cada uno de los correos electrónicos que hagan parte de la base de datos de la Convocatoria.

7-. Requerir a la **Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”** que, en el término de un (01) día, informe a este despacho si la presente acción de tutela reúne los elementos de triple identidad que configure una tutela masiva⁴, conforme lo señalado por la Corte Constitucional en auto A-1719 de 2022 y, de ser así, señale cual fue el despacho que notificó, por primera vez, la admisión de una acción de tutela con la triple identidad del presente asunto.

8-. Tener como pruebas las allegadas con por el accionante, a las cuales se dará el valor que en derecho corresponda.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente por SAMAI)
ADRIANA INÉS BRAVO URBANO
JUEZ

⁴ Artículos 2.2.3.1.3.1. y 2.2.3.1.3.2. del Decreto 1069 de 2015, adicionado por el artículo 1° del decreto 1834 de 2015.